



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA
SALA LABORAL

ORDINARIO No. 15001 3105 004 2019 00309-01 (2021-1226)

ASUNTO: APELACIÓN Y CONSULTA SENTENCIA

DEMANDANTE: WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ

DEMANDADOS: COLPENSIONES Y OTROS

MAGISTRADA PONENTE
FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ

Acta No. 027

Tunja, cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., y OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., contra la sentencia del 14 de mayo de 2021, así como el grado de consulta respecto de la misma.

ANTECEDENTES

WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ entabla demanda laboral¹ en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS PENSIONES Y**

¹ Archivo 1

CESANTÍAS y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OLD MUTUAL**, para que declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual y como consecuencia se restituyan los valores como cotizaciones con todos los rendimientos que tenga en su cuenta de ahorro individual, a la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES y se active su afiliación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Como sustento fáctico manifiesta que estuvo afiliada al ISS desde el 14 de noviembre de 1985. Se trasladó a COLFONDOS el 8 de noviembre de 1996 con fecha de efectividad el 1 de enero de 1997. Luego se trasladó a PORVENIR S.A. y en junio de 2008 a OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS SA. En abril de 2012 a PORVENIR S.A. y en agosto de 2014 a PROTECCIÓN S.A.

Señala que ninguna de las administradoras de pensiones en las que ha estado vinculada le ilustraron ni asesoraron respecto al régimen pensional que administraban, ni sobre el otro existente, ni cual le era más conveniente.

Presentó solicitud a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES para que se declarara ilegal, nulo o ineficaz, el traslado de Régimen, a lo cual no se accedió.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES², se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que en el caso concreto se encuentra que no hubo por parte de la accionante WILDA ALCIRA BERNAL DOMINGUEZ ninguna solicitud de información sobre su futuro pensional, sustrayéndose así de sus deberes como afiliado al sistema general de pensiones y convalidando su deseo de permanencia en el RAIS, al efectuar periódicamente las cotizaciones, sin presentar solicitud de traslado al Régimen de

² Archivo 1

prima Media, desde noviembre de 1996, momento a partir del cual se encuentra válidamente en el RAIS.

Que la actora está en la prohibición del traslado porque se encuentra a menos de 10 años del cumplimiento del requisito de edad y por lo tanto no es viable su retorno al régimen de prima media.

Señala que la demandante se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al firmar los formularios de afiliación de manera libre, consciente y voluntaria y que COLPENSIONES no está facultada para recibir los aportes efectuados al RAIS, de manera libre y voluntaria por más de 20 años.

Indica que con el fin de no vulnerar el equilibrio y sostenibilidad del sistema general de pensiones, en caso de declararse la nulidad del traslado es necesario no solo devolver las cotizaciones con sus rendimientos, sino la totalidad de los recursos consignados y pagados en la AFP.

Presenta excepciones de fondo, entre ellas, la prescripción.

OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., ³ contesta la demanda oponiéndose a las pretensiones, porque la demandante al momento de la afiliación a OLD MUTUAL S.A., realizó un traslado automático entre AFP del RAIS.

Que el traslado de régimen que efectuó la demandante se sujeta a la presunción de validez por cuanto se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y no ejerció el derecho de retracto contenido en el artículo 3º del Decreto 1161 de 1994.

Indica que es insólito que, de un lado se solicite se declare la invalidez con los efectos que conlleva, pero a su vez quiera aprovechar los beneficios del RAIS.

3 Archivo 1

Como excepciones de mérito plantea las de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación a cargo de OLD MUTUAL S.A., cobro de lo no debido, buena fe y la innominada.

PROTECCIÓN S.A.,⁴ da respuesta a la demanda oponiéndose a las pretensiones en la medida que el traslado de régimen que efectuó la demandante se sujeta a la presunción de validez por cuanto se hizo de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, en su artículo 13.

Con PROTECCIÓN no realizó traslado de régimen, sino un tránsito automático entre AFP del RAIS, habiendo estado afiliado a PORVENIR. COLFONDOS Y OLD MUTUAL S.A; luego, sí conocía el RAIS y su aceptación la llevó a buscar nuevas ofertas dentro del mismo régimen.

Propone como excepciones de fondo falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación a cargo de PROTECCIÓN S.A., cobro de lo no debido, buena fe y la innominada.

COLFONDOS,⁵ se opone a las pretensiones por cuanto, si bien no cuenta con los soportes de la asesoría brindada a la demandante, para el momento del traslado se le dio información verbal sobre las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual y los beneficios que traía afiliarse a un fondo privado.

Presenta como excepción de fondo inexistencia de declaratoria de ineficacia.

PORVENIR S.A.,⁶ da respuesta oponiéndose a las pretensiones, por cuanto la afiliación de la demandante en el año 2012 fue producto de una decisión libre e informada, después de haber recibido una asesoría amplia sobre las implicaciones de su decisión, el funcionamiento del RAIS y de sus condiciones pensionales

4 Archivo 1

5 Archivo 1

6 Archivo 7

individuales, tal como se aprecia en la solicitud de vinculación N° 14689323 - documento público- que se presume auténtico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y el párrafo del artículo 54 A del CPT.

Señala que no existieron vicios en el consentimiento, ni causa u objetos ilícitos, de conformidad con los artículos 1504 y siguientes del código civil, en tanto que la decisión de la parte demandante fue libre, voluntaria e informada, tal como se evidencia en el formulario de vinculación.

Tampoco procede la ineficacia a que se refiere el artículo 271 de la ley 100 de 1993, en cuanto esta ópera frente a actos que impidan o atenten contra el derecho de afiliación al sistema; es decir contra conductas dolosas, que en este caso ni se alegan ni se acreditan por la demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, a la parte demandante le aplica la restricción contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003,

Como excepciones de mérito propone prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y genérica.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja en sentencia del 14 de mayo de 2021, resolvió:

“PRIMERO. Declarar ineficaz el traslado y afiliación en pensiones que realizó **WILDA ALCIRA BERNAL DOMINGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39643015 del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, al fondo de pensiones Colfondos S.A., posteriormente Old Mutual, Porvenir S.A. y finalmente Protección S.A. acorde con lo señalado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. Declarar que la A.F.P. inicialmente Colfondos, Porvenir, Skandia y Protección S.A. deben trasladar ante la Administradora Colombiana de Pensiones

2021-1226 WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ VS. COLPENSIONES Y OTROS
(CONFIRMA SENTENCIA)

COLPENSIONES la totalidad de las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, rendimientos, intereses, comisiones, sin lugar a descuentos por gastos de administración y el seguro provisional a favor de **WILDA ALCIRA BERNAL DOMINGUEZ**, de tal manera que tenga la totalidad de los aportes como si nunca se hubiese trasladado del régimen de prima media con prestación definida.

TERCERO. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, activar la afiliación de la señora **WILDA ALCIRA BERNAL DOMINGUEZ** teniendo en cuenta la fecha inicial de la afiliación que lo fue el 14 de noviembre del año 1985.

CUARTO. Condenar a las A.F.P. Colfondos S.A., Porvenir S.A., Skandia, Y Protección S.A. para que en el término de un mes trasladen ante la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, rendimientos, así como frutos e intereses correspondientes a **WILDA ALCIRA BERNAL DOMINGUEZ**, sin lugar a descuentos por gastos de administración, de tal manera que tenga la totalidad de los aportes como si nunca se hubiere trasladado del régimen de prima media con prestación definida.

QUINTO. Se condena en costas a cada una de las administradoras convocadas al proceso: Colfondos S.A., Porvenir S.A., Old Mutual y Protección S.A. fijando como agencias en derecho la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS como se señala en la parte motiva y se ordena que se liquiden las costas por secretaría. Sin costas en contra de Colpensiones.

SEXTO. Se ordena la consulta de esta decisión por mandato del art. 69 del Código de Procedimiento Laboral por cobijar a Colpensiones y en caso que no fuere apelada."

APELACIÓN

COLPENSIONES

Interpone recurso de apelación solicitando se revoque el fallo. Indica que se aparta de la interpretación que hace el despacho del decreto 663 del año 1993, pues dicha normatividad no reguló el deber de asesoría y buen consejo, por lo que la A.F.P. no tenía obligación de entregar proyección o comparativo alguno entre uno y otro régimen, lo que se estableció con la expedición de la ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, con posterioridad al traslado inicial de la accionante, circunstancia entonces que lleva a presumir que para esta data no estaba regulado este deber en los términos en que se señala en la sentencia.

El único requisito exigible para esa fecha era la manifestación libre y voluntaria de la actora de pertenecer a uno u otro régimen y la suscripción del formulario de afiliación da fe del deseo de pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad, que no solamente fue expresado con esa firma sino con la de los

posteriores formularios de afiliación que convalidan su voluntad de permanecer al RAIS y se enmarcan dentro de los actos de relacionamiento señalados en la sentencia SL 3752 de 2020, cuyos supuestos facticos son similares a los del presente caso.

Señala no estar de acuerdo con la inversión de la carga de la prueba en cabeza de las AFP pues implicaría aceptar una presunta ignorancia de la ley por parte de la totalidad de los afiliados sin hacer distinción alguna para considerarlos como una parte débil y en consecuencia inexperta. La información que se echa de menos por la actora se encuentra consagrada en una norma de carácter nacional que impone su conocimiento a la totalidad de los afiliados.

Finalmente, y en el eventual caso de que se confirme la sentencia, solicita se adicione ordenando la indexación de las sumas a devolver para evitar cualquier descapitalización del sistema.

PROTECCIÓN S.A.

Presenta recurso para que se modifique la sentencia, atendiendo que no puede devolver la totalidad de los dineros porque el artículo 20 de la ley 100 de 1993 señala que el 3% del IBC de los afiliados se destina a un pago de una administración y un seguro provisional, que se está pagando mensualmente a una aseguradora y no es dable que en este momento se recurra a este tercero de buena fe para solicitarle dineros que fueron pagados y descontados teniendo en cuenta un mandato legal y un contrato.

Solicita se amplíe el término de cumplimiento dada la cantidad de procesos que se están adelantando.

OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Solicita se revoque el fallo, y en consecuencia se declare la eficacia del traslado que se realizó en el año 2012 a Skandia, pues con la movilidad en el RAIS tuvo la

oportunidad de selección. Se le brindó por esa AFP la información de manera verbal, por lo que debe tenerse en consideración lo establecido en el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y la aclaración de voto del Magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán. De la misma manera, el artículo 4 del decreto 2241 de 2010.

Que en caso de que no se revoque la sentencia, se modifique en lo atañe a los gastos de administración al estarse desconociendo lo establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y generando un empobrecimiento para esa AFP.

Se revoque la condena en costas al tratarse de un punto de derecho y actuar de buena fe su representada.

PORVENIR S.A.

Interpone recurso en lo que refiere al análisis que se hace de la normatividad aplicable para el caso. Para el año 1996 no existía normatividad que obligara a los fondos a dejar prueba de la información suministrada ni el deber de buen consejo. No hay lugar a la inversión de la carga de la prueba, porque han pasado más de 23 años en los cuales los asesores o promotores comerciales ya no desarrollan labores con los fondos de pensiones y es difícil que recuerden con precisión los detalles.

Debe analizarse este caso en particular, por cuanto los movimientos dentro del RAIS constituyen un acto de relacionamiento.

Señala que no hay lugar a la declaratoria de ineficacia del traslado, porque fue un acto voluntario y libre. Tampoco hay prueba de la configuración de un acto doloso o de mala fe en que haya incurrido alguno de los fondos de pensiones en los que estuvo la demandante.

En caso de que se confirme la decisión, se de aplicación a los artículos 963 y 964 del CC, en el entendido que los rendimientos financieros deben darse solamente a partir del acto de notificación de la demanda.

Que no se ordene la devolución de los gastos de administración porque fueron entregados a un tercero de buena fe y la demandante estuvo incluida en una póliza colectiva, es decir que estuvo cubierta y mal podría solicitarse la restitución

A L E G A T O S

PARTE DEMANDANTE, solicita se confirme el fallo teniendo en cuenta que los argumentos jurídicos y el análisis fáctico que se hizo para proferirlo; y por el contrario, no se atiendan favorablemente los argumentos de las apelaciones por no tener ningún asidero legal ni probatorio.

Que es obligación de PROTECCION adoptar las medidas necesarias para dar el cabal cumplimiento a las numerosas condenas impuestas, por el incumplimiento de sus obligaciones.

OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., amplía y ratifica los argumentos expuestos en la apelación. Solicita revocar la sentencia y absolverla de cualquier consecuencia.

PROTECCIÓN, solicita revocar la sentencia y en su lugar, absolver a la AFP de la devolución de los dineros referentes a administración y seguro provisional.

PORVENIR y COLFONDOS, guardaron silencio.

C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el **principio de consonancia** la Sala aborda como **problema jurídico** determinar si el traslado realizado por la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz. Y, en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA previsto en el art. 69 del

CPT a favor de COLPENSIONES, determinar si es obligación de la entidad recibir a la demandante junto con todos los valores que COLFONDOS, PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A., y OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., le trasladen, como consecuencia de la ineficacia del traslado de la actora.

El **derecho a la información** se encuentra contemplado en el art. 20 de la Constitución Política e indica que todas las personas tienen derecho a recibir información veraz e imparcial. Así, la Corte Constitucional en sentencia C-488/93 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló:

“El derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial”.

En el presente asunto se pretende la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional porque no obtuvo la demandante la información necesaria para adoptar a conciencia su decisión.

Al efecto se acredita que la señora **WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ**, nació el 10 de mayo de 1965⁷, se afilió al ISS el 14 de noviembre de 1985, conforme al reporte de semanas cotizadas de COLPENSIONES⁸, se trasladó de régimen a COLFONDOS S.A., el 1 de enero 1997. Se trasladó dentro del RAIS conforme al SIAFP⁹, así: de COLFONDOS a OLD MUTUAL, el 1 de junio de 2008; OLD MUTUAL a PORVENIR el 1 de abril de 2012 y de PORVENIR a PROTECCIÓN el 1 de agosto de 2014.

Entonces, debe mirarse si para el traslado de régimen, la obligación de dar información adecuada y suficiente se cumplió por parte de la AFP, advirtiéndose

7 Archivo 1-folio 92

8 Archivo 1-Folio 97

9 Archivo 5

que la mera suscripción del formulario de traslado de régimen no demuestra su cumplimiento, como se expuso en sentencia con radicado 68838, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

"Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

(...)

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SL19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna."

Así, la manifestación referente a la validez del formulario de afiliación no resulta admisible, porque en este asunto no se está debatiendo que la demandante no tuviera capacidad para suscribir el formulario de afiliación, sino que no se le dio la asesoría suficiente para adoptar una determinación informada.

*Tampoco son de recibo los planteamientos acerca de que **se comprometió la libertad de elección de régimen pensional o algún vicio del consentimiento**, por cuanto lo que se debatió no fue una nulidad sino la ineficacia del traslado de régimen por incumplimiento de la obligación legal de información impuesta a la AFP, a la que le corresponde demostrar que acató la obligación de advertir a la demandante, para que con la autonomía y libertad informada, resolviera sobre el traslado, como se deduce del artículo 1604 del C.C. que indica que la demostración de la diligencia y cuidado corresponde a quien ha debido emplearla.*

Además que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha proferido varias decisiones en casación, entre otras, las SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019 y SL 1689 de 2019, en las cuales marca las directrices o sub reglas para que se configure la ineficacia del traslado de aquellas personas que, habiendo estado afiliadas en el Régimen de Prima Media con Prestación definida, pasaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, indicando que la consecuencia del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado.

De la misma manera sobre la **carga de la prueba** la jurisprudencia ha fijado en cabeza de las AFP la obligación de acreditar que cumplieron a cabalidad su deber de informar adecuadamente a quienes deseen afiliarse a ellas, sobre las condiciones de dicho régimen, como puede verse en las sentencias del 9 de septiembre de 2008, radicado 31314, y del 22 de noviembre de 2011, radicado 33083, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, primera de las cuales en la que indicó:

“Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

“Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura.

...

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

...

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

2021-1226 WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ VS. COLPENSIONES Y OTROS
(CONFIRMA SENTENCIA)

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. “

Dejando claro así el deber de información adecuada que tienen las AFP en estos casos. Posteriormente en la sentencia SL12136 del 3 de septiembre de 2014 con ponencia de la misma magistrada, se pronunció sobre la necesidad de que las AFP demuestren el cumplimiento de la carga de brindar adecuada información. Así dijo:

“A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

...

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable."

De esta manera, debido al carácter técnico y financiero del asunto las personas idóneas para otorgar la información son las AFP quienes tienen la carga probatoria de acreditar que brindaron asesoría suficiente y no el afiliado, independientemente de su formación profesional, pues se trata de una obligación a cargo de aquellas.

En este orden de ideas, en el asunto sub examine, al alegar la demandante la omisión por falta de información en que incurrieron las AFP, la carga de la prueba fue trasladada a estas administradoras, a las que les correspondía demostrar que la señora BERNAL DOMÍNGUEZ al momento de trasladarse de régimen pensional contaba con toda la información precisa, completa y comprensible según el caso, incluyendo los beneficios y las consecuencias negativas que conllevaba tal acto, de lo cual no se encuentra prueba alguna.

Referente al **Decreto 663 de 1993**, en lo que atañe al deber de información por parte de las AFP, cabe precisar que, es claro, que a las AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad les correspondía desde su creación, demostrar que en efecto, le proporcionaron a la demandante información completa, técnica y adecuada, que le permitiera a través de elementos de juicio claros y objetivos, adoptar una decisión informada, como se infiere del artículo 97-1 de la mencionada norma. Sólo el cumplimiento de esas medidas fundamentales, permite deducir que el traslado cumplió con los mínimos de transparencia, y lealtad. Es así como en sentencia SL 1452 del 3 de abril de 2019, MP. Clara Cecilia dueñas Quevedo, se determinó:

“En armonía con lo anterior, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1.º del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

De esta manera, como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de la información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba por tanto de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a los ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público.

...

Ahora bien, la información necesaria a la que alude el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

...

Desde este punto de vista, para la Corte es claro que desde su fundación, las administradoras ya se encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir «un juicio claro y objetivo» de «las mejores opciones del mercado»."

Ahora, si bien es cierto que podía hacer uso del **derecho de retracto** o **retornar al régimen de prima media**, también lo es que su inconformidad radica en el hecho de no haberle explicado en el momento del traslado las consecuencias reales de su decisión, es decir, de no haber tenido a su alcance todas las herramientas para decidir a conciencia.

De la misma manera, el hecho de que la actora **no pidiera información** a lo largo de su afiliación a las AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no soslaya las falencias del deber de información evidenciadas al momento de realizar la afiliación, cuando se surtió el cambio de régimen pensional. Por ende, tampoco tiene incidencia que la actora tuviese la **capacidad de obligarse**, además de que, como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia en sentencia, radicado 662987, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo:

"... la administradora profesional y el afiliado inexperto se encuentran en un plano de desigualdad, que la legislación interna reequilibra mediante la exigencia de un deber de información y probatorio a cargo de la primera..."

En lo concerniente, al principio de **sostenibilidad financiera del sistema pensional**, el cual se consagró a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, la Corte Constitucional C-111-2006. MP Rodrigo Escobar Gil señaló:

" el derecho a la seguridad social como derecho prestacional requiera, entre otros aspectos, de una estructura básica que permita atenderlo y de una constante asignación de recursos provenientes, en primer lugar, del cálculo actuarial del

2021-1226 WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ VS. COLPENSIONES Y OTROS
(CONFIRMA SENTENCIA)

mismo sistema, a través de tasas de cotización, semanas mínimas de permanencia, períodos de fidelidad, plazos de carencia, cotizaciones voluntarias, rendimientos financieros, etc.; y en segundo término, del subsidio del Estado, quien a través de sus propios recursos fiscales, debe asegurar el acceso de todos los habitantes del territorio colombiano a los derechos irrenunciables de la seguridad social."

"La seguridad social goza de carácter de fundamental al ser conexo y paralelo a la vida, al trabajo y la salud; este derecho tiene su expreso reconocimiento genérico en el artículo 48 de la Carta, y específicamente para las personas disminuidas físicas, sensoriales y psíquicas en los mandatos 13 y 17 superiores".

En este asunto no se evidencia que se vulnere el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, toda vez que los aportes pensionales realizados por la demandante en las AFP, se trasladan en su totalidad y con ello se dispone solventar el derecho pensional adquirido por la actora, con arreglo a la ley.

*Por otra parte, sobre la condena que el a quo les impuso a la AFP del RAIS de **trasladar a COLPENSIONES las cotizaciones, aportes, bonos pensionales, rendimientos, así como frutos e intereses, sin descuento alguno por gastos de administración**, cabe señalar que la jurisprudencia se ha pronunciado¹⁰, aclarando que el traslado de los aportes realizados por la demandante, junto con sus rendimientos y demás elementos económicos a COLPENSIONES, se debe realizar sin descontar ningún concepto, porque la AFP del RAIS debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado como lo establece el artículo 1746 del C.C., sin deducciones de ningún tipo, esto es, como si el demandante nunca se hubiese trasladado, lo que le garantiza a COLPENSIONES, que las sumas que reciba sean las mismas que hubiere recibido si el afiliado hubiera cotizado en el RPM, lo que impide la descapitalización del fondo común a que aluden los recurrentes.*

Así mismo, esta sala ha acogido lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL4989 del 14 de noviembre de 2018, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, que citó la sentencia CSJ SL17595-2017, que rememoró la sentencia 31989 del 8 de septiembre de 2008, así:

¹⁰ Sentencia SL 1421 del 10 de abril de 2019, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

¹¹ Radicado 150013105003201900189-01 (2020-1303) MP. María Isabel Fonseca González

“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad **fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez**, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.” SE RESALTA

Criterio reiterado en la sentencia SL4360 del 9 de octubre de 2019, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, al indicar:

“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que **los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones** (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”. SE RESALTA

Lo cual guarda consonancia con lo indicado en la sentencia SL2817 de 2019, que reiteró: “En consecuencia, ante la ineficacia de la afiliación del actor a PROTECCION S. A., PORVENIR S.A. y su retorno al RPMPD, administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, la primera AFP deberá “devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración.” a la segunda, conforme lo ha expuesto la Corte en la sentencia CSJ SL1421-2019, que reiteró la regla de las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989”

De esta manera, le corresponde a COLPENSIONES, al momento del traslado de los valores ordenados a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS, OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y PORVENIR S.A, verificar que las sumas que reciba, correspondan a las referidas en precedencia y se ajusten a los precisos mandatos legales y precedentes jurisprudenciales citados.

No sobra advertir que la declaratoria de ineficacia del traslado en aplicación del artículo 1746 del C.C. lleva implícita la devolución de todos los saldos que por cualquier concepto hubiesen recibido las AFP por su utilización y durante el tiempo que los tuvieron en su poder, lo que garantiza a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES que las sumas que reciba son las mismas que hubiera recibido si el afiliado hubiera seguido cotizando en el RPM y que contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema.

Frente a la **prohibición del artículo 13 de la Ley 100 de 1993**, en este caso no se trata de un traslado sino de la violación del deber de información que afecta la validez del acto jurídico, considerado en sí mismo. Así se afirmó en sentencia de la CSJ, Sala de Casación Laboral, radicado 662987:

“sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, si se tiene o no un beneficio transicional, o si se está próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico en sí mismo...”

Ahora en cuanto a que no resulta procedente dar aplicación al **artículo 271 de la ley 100 de 1993**, cabe precisar que esta norma concuerda con el artículo 13, por lo que resulta válida la interpretación que hace de la misma el a quo, en coherencia con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688-2019.¹²

¹² “De acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la citada ley, los trabajadores tienen la opción de elegir «libre y voluntariamente» aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, previniendo que, si esa libertad es obstruida por el empleador, este puede ser objeto de sanciones. Es así como paralelamente el artículo 271 precisa que las personas jurídicas o naturales que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, son susceptibles de multas, sin perjuicio de la ineficacia de la afiliación”.

2021-1226 WILDA ALCIRA BERNAL DOMÍNGUEZ VS. COLPENSIONES Y OTROS
(CONFIRMA SENTENCIA)

En cuanto a la solicitud de OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. para que no se revoque la condena en **costas**, debe advertir la Sala que, en virtud del art. 365 del CGP le corresponde asumirlas a quien pierde el proceso cuando hay contradicción, sin que sean atendibles razones subjetivas como las que plantea el recurrente. Al respecto, se puede consultar la sentencia C-89 de 2002, que estudió el numeral 199 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificó el artículo 393 del C.P.C,

Ahora sobre lo alegado por las AFP, acerca de que no se puede **exonerar al afiliado de la responsabilidad** de informarse suficientemente para adoptar su decisión de traslado de régimen, como se referenció en la **aclaración de voto del Magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán**, cabe precisar que esta Sala acoge la posición mayoritaria de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, en el entendido que la AFP, debido al carácter técnico y económico del asunto, es la encargada de brindar información suficiente a sus afiliados y el incumplimiento de este da lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación, por cuanto el afiliado no puede adoptar una decisión libre y voluntaria, que le permita comprender y entender las consecuencias de su determinación, lo que de por sí se constituye en un perjuicio, tratándose de un elección fundamental para optar por su derecho pensional. De la misma manera, es preciso advertir que el precedente vinculante lo constituye la decisión mayoritaria de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y no la aclaración de voto.

En cuanto a la **aplicación del artículo 964 del Código Civil sobre la buena fe del negocio jurídico** alegada por PORVENIR para controvertir la devolución de las sumas recibidas, debe decirse que esos recursos son el soporte financiero de la prestación pensional y su restitución es procedente como consecuencia de la conducta indebida de la administradora, al omitir el cumplimiento de su deber de información, de conformidad con la jurisprudencia citada.

En lo que atañe a la **sentencia SL 3752 del año 2020, que** señaló que los traslados horizontales, además de ratificar la voluntad inicial, permiten determinar que la accionante tenía un conocimiento claro de cuáles eran los efectos y características del régimen de capitalización en su situación pensional, es necesario precisar que la mencionada decisión, luego de reiterar la obligación de las AFP de brindar información adecuada a quienes pretenden afiliarse a ellos, así como la obligación de acreditar el cumplimiento de ese deber, se refiere a la pertinencia de resolver los conflictos acerca de seguridad social sin tanto arraigo a las formalidades o protocolos, y con más apego a la intención real que despliegan los afiliados a través de sus actuaciones, refiriendo algunos ejemplos y abordando el tema así:

“Dichos comportamientos o **actos de relacionamiento**, en los casos de afiliación, pueden verse traducidos en acciones concretas de los afiliados tales como presentar solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, entre otros. Así lo ha establecido esta Corporación en el fallo CSJ SL413-2018, en donde dijo que,

Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito *ad substantiam actus* de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

A partir de lo expuesto en precedente, se tiene que los traslados horizontales dentro del Régimen de Ahorro Individual, es decir los cambios entre administradoras de fondos privados de pensiones, reúnen los elementos propios de unos actos de relacionamiento, lo cual permite suponer que el afiliado desea continuar en dicho régimen, aunque bajo la asesoría y beneficios que le pueda proveer otra administradora de pensiones, las cuales compiten entre sí.” (Negrilla fuera del texto)

Conforme con lo cual, los traslados horizontales dentro del RAIS son actos de relacionamiento que permiten entender la voluntad del afiliado de permanecer en ese régimen. Sin embargo, en la misma sentencia se precisa que es necesario estudiar cada caso en particular para determinar si las AFP cumplieron la obligación de desvirtuar la asimetría de la información, para que el juzgador tenga a su alcance los medios de convicción que le den certeza sobre la situación particular. Así dijo:

*“Por lo tanto, lo que define que un caso se resuelva declarando o no la nulidad, depende del ejercicio probatorio que hayan hechos las partes dentro del proceso a fin de esclarecer si la persona estaba o no debidamente informada. Ello conlleva a sostener, **que se trata de discusiones eminentemente casuísticas que no pueden convertirse en reglas generales de criterio, sino en consideraciones intrínsecamente atadas a lo que se ponga de manifiesto dentro del litigio.***

En ese orden de ideas, es dable concluir que, aun cuando no haya certeza de si el afiliado recibió al momento de su traslado toda la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que la persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con todos los elementos para forjar con plena convicción su elección.”

Y, para el caso concreto, llegó a las siguientes conclusiones:

“1. La línea de criterio de la Sala ha sido mucho más extensa, en el sentido de buscar que exista simetría de la información, es decir, que la persona cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para que, en su caso concreto, tome la decisión que considere más beneficiosa.

Dicho lo anterior, no se busca crear reglas de pensamiento general e inamovible, tales como creer que siempre el Régimen de Prima Media será más favorable para los afiliados en contraposición al de Ahorro Individual, o presumir que siempre hubo engaño por no mediar documentación dentro del expediente que acredite la información suministrada.

*En su lugar, **por lo que se propende es porque el juez forje de manera libre su convencimiento a partir de ciertas directrices claras, a saber, que la asesoría prestada por los fondos de pensiones -así sea verbal o escrita-, sea focalizada y dirigida a las condiciones particulares de cada uno de los afiliados.***

No se trata solo de elaborar un discurso abstracto que explique en que consiste uno y otro régimen, sino que, por el contrario, contenga las implicaciones concretas (por ejemplo, mediante proyecciones), de lo que sería la causación de su derecho pensional en uno u otro escenario.

Se recuerda que la importancia del derecho a la seguridad social amerita a que, por un lado, **las administradoras de pensiones en su rol de conocedoras del funcionamiento del Sistema contribuyan de manera directa a la decisión de las personas y, finalmente, a que aconsejen bajo parámetros legales sin que estén de por medio intereses de ningún otro tipo.**

2. En ese orden de ideas, se advierte que, si bien las conclusiones del Tribunal fueron inicialmente desacertadas, en el sentido de asignarle la carga de probar al afiliado los presuntos vicios del consentimiento en los que incurrió y no a las administradoras de pensiones, lo cierto es que tal desatino no sería relevante teniendo en cuenta la situación jurídica concreta de la señora Lara Rodríguez.

Lo anterior, puesto que a través de los actos de relacionamiento que quedaron plenamente acreditados dentro del proceso, esto es, el traslado horizontal constante entre administradoras de pensiones dentro del Régimen de Ahorro Individual, la información, aunque parcial, dio cada uno de los fondos y el regreso permanente a la primera entidad elegida, se puede razonablemente entender la vocación que tenía la accionante de permanecer vinculada en el Régimen de Ahorro y, sobre todo, de no retornar a Colpensiones pese a las prerrogativas con las que allí inicialmente contaba.

Se insiste, tales comportamientos tácitos de la accionante no conducen a entender que hubiera existido una perpetuidad en la asimetría de la información, sino que, por el contrario, un objetivo claro de continuar en este Régimen, asumiendo los beneficios y consecuencias que su decisión traía consigo."

Teniendo presente lo aseverado por la alta corporación, en este asunto, contrario a lo señalado por los recurrentes, el hecho de que la demandante se haya movilizado dentro del RAIS, no desvirtúa su afirmación de que no contó con los elementos necesarios y suficientes para tomar la decisión más beneficiosa sobre su futuro pensional, al no allegar ningún medio probatorio que demuestre que se brindó la misma, diferente al formulario de vinculación, que como se anotó, no es suficiente. La sentencia establece que deben analizarse las circunstancias particulares de cada caso para establecer si los actos de relacionamiento permiten concluir que se rompió la asimetría de la información y, para el caso que nos ocupa, se tiene que conforme al interrogatorio de parte surtido por la demandante, se desempeña como Secretaria Ejecutiva Bilingüe (sin que se acredite que tenga conocimientos en área jurídica) y realizó varios traslados en el RAIS porque llegaban los asesores de las AFP, a su sitio de trabajo promoviendo mejores condiciones de rentabilidad que permitirían tener un mayor valor de

pensión, pero omitiendo los demás aspectos que permitieran adoptar una decisión consciente con elementos de juicio claros y objetivos.

Respecto a la excepción de **prescripción** propuesta, ha de decirse que no hay lugar a declarar su prosperidad pues aquí se trata de la declaración de una situación de hecho y no de un derecho, aunque si está encaminada a lograr a futuro la consolidación de uno que es imprescriptible, en los términos explicados en la sentencia SL1689 de 2019, reiterado en la SL 4811 de 2020.

De conformidad con lo expuesto se confirmará la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.,** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OLD MUTUAL** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, atendiendo que el recurso no prosperó y hubo oposición.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA,** por intermedio de su **SALA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada y apelada, teniendo en cuenta las precisiones que sobre las restituciones a cargo de las AFP, se hicieron en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas de esta instancia a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y**

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OLD MUTUAL.

TERCERO: Oportunamente, por Secretaría devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

**FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ
MAGISTRADA**

**MARIA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ
MAGISTRADA**

**JULIO ENRIQUE MOGOLLÓN GONZÁLEZ
MAGISTRADO.**

Auto: En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala en providencia que antecede, la magistrada ponente fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 1 SMLMV a cargo de cada una de las demandadas, esto es, **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OLD MUTUAL.**

**FANNY ELIZABETH ROBLES MARTINEZ
MAGISTRADA PONENTE**

Firmado Por:

Fanny Elizabeth Robles Martinez
Magistrada
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Tunja

Julio Enrique Mogollon Gonzalez
Magistrado
Sala 002 Laboral
Tribunal Superior De Tunja

Maria Isbelia Fonseca Gonzalez
Magistrada
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Tunja

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **37adb5682aa9e5741fe038ae492f07763dbfc28347d11c6b52731ed47d3c0969**

Documento generado en 05/08/2021 12:20:25 p. m.